

Horizonte municipalista: 2019

El año 2017 comenzaba con las mejores previsiones de crecimiento en Europa desde hace una década. La Comisión Europea auguraba crecimientos del PIB para España y Grecia superiores al 2,5%, para Portugal cercanos al 2% y para Irlanda superiores al 3%. Los datos macroeconómicos de 2017 parecían traer buenas noticias.

A pesar de la profunda incertidumbre política provocada por el Brexit, el crecimiento de la extrema derecha o el ascenso de fuerzas transformadoras en países como España, la UE y las élites políticas pretenden imponer su particular interpretación política. De acuerdo con ésta, el espacio europeo se estabiliza a medida en que la deuda pública entra bajo control y se observan buenos resultados en las cifras globales de empleo. Sin embargo, las turbulencias políticas europeas ocultas no son sino la expresión de una crisis social que no cesa; las paupérrimas mejoras económicas parecen no estar llegando al conjunto de la población.

La UE pretende transmitir una sensación de estabilidad que, por ceñirnos al caso del Estado español, se presenta como un espejismo frente a una realidad tozuda que contrasta brutalmente con el discurso oficial. Baste como ejemplo la llamada “primavera del empleo” que anunció recientemente la ministra Fátima Báñez y que por supuesto provocó bromas, también indignación, entre una población altamente precarizada, cada vez más encasillada en la categoría de “trabajadores y trabajadoras pobres”.

El teatrillo debe, no obstante, continuar. Mario Draghi (Presidente del Banco Central Europeo) lleva varios meses anunciando un cambio de ciclo que será determinante para desvelar el verdadero rostro de la crisis europea. Sin prisa pero sin pausa, el BCE ha anunciado que las denominadas políticas de expansión cuantitativa, el chorreo mensual de “dinero gratis” que recibía la banca europea y el sistema financiero para mantener a raya la crisis de deuda de los países europeos, iba a tocar a su fin. Ya en el mes de abril el programa de compra de deuda soberana se redujo de 80.000 millones de euros mensuales a 60.000, al tiempo que a partir de este mes de octubre, el Banco Central Europeo irá poniendo fin al programa de compra de activos. Poco a poco, se van dando así los pasos hacia una situación compleja, en la que la subida de los tipos de interés y el encarecimiento del dinero permitirán recoger beneficios a los países centrales de la red europea, y especialmente Alemania.

Y mientras todo esto sucede, España sigue lanzando señales de alarma que sacan a la luz las vergüenzas de una crisis social persistente. Si nos ceñimos de nuevo a los datos, vemos que el gobierno de Rajoy ha llevado la deuda pública al 100% del PIB. El pasado mes de abril, la Autoridad Fiscal Independiente (AIREF) informaba que la conocida como “hucha de las pensiones”, que llegó a tener con el gobierno de Zapatero un superávit de 70.000 millones de euros, quedará completamente vacía en 2018. Como remate, el pasado 6 de septiembre, el Banco de España cuantificó el descalabro que supuso para las arcas públicas el rescate bancario. Según sus cuentas, siempre muy a favor de obra (esto es, del gobierno), de los 54.353 millones de euros que costó el rescate, tan solo se recuperarán —y nosotros añadimos con mucha suerte—, poco más de 14.275 millones

Parece que entre estas noticias, sólo los datos del empleo arrojan cierta luz, al menos la “primavera de Fátima” es más presentable en los telediarios. Los datos de empleo han ofrecido una curva claramente positiva en los últimos trimestres, salvo durante el pasado mes de agosto. Es de sobra conocido, sin embargo, que el empleo que se crea en España tiene unas tasas de temporalidad y precariedad crecientes. A día de hoy, tener un trabajo no es sinónimo de tener acceso a una renta mínima para sobrevivir. Con una temporalidad que supera el 90 % del empleo creado y con tasas de paro juvenil que en los menores de 25 años rondan el 40 %, España se sitúa, al lado de Polonia y Grecia, como los tres peores países de Europa en lo que a empleo se refiere. Además contamos con la segunda tasa de temporalidad más alta de la UE, un 26,1 %, y nos vamos consolidando en la primera plaza con los salarios más bajos. Sin ir más lejos, en 2015 según la Agencia Tributaria más de 6 millones de personas habían cobrado de media por debajo de los 700 euros mensuales. Estos datos explican las razones por las que en 2016, un 28,6 % de la población española se encontraba en riesgo de pobreza y exclusión social.

El panorama general no es precisamente esperanzador. De un lado, la incertidumbre se impone sobre el sistema financiero español a medida que el Banco Central le retire la respiración asistida. De otro, queda saber como se desarrollarán las políticas sociales básicas ante el ruinoso equilibrio fiscal que mantiene el gobierno del PP. En último lugar, queda por ver qué modelo productivo podrá sostener las crecientes rentabilidades que deberán satisfacer las ya anunciadas subidas a medio plazo de los tipos de interés. Se trata de incógnitas sobre un futuro inmediato que se parece demasiado al escenario vivido desde 2008. Todo ello se produce en medio de una crisis social que no cesa y que no hace sino corroborar que el único mecanismo de redistribución de la riqueza —si podemos denominarlo así— ha sido la generalización del empleo precario. Sirva como elemento significativo, el hecho de que en 2016, con un PIB similar al de 2008, se repartieron 54.000 millones de euros menos en salarios.

El mecanismo de bombeo de beneficios y de escaso reparto de la riqueza manifiesta la dirección de la gestión de la crisis. En este sentido, es imprescindible atender de nuevo al territorio y —muy especialmente— a los espacios urbanos como centros de la operación de reflotamiento relativo de la economía española. Al igual que antes de 2008, el engranaje se basa en la desarticulación de las interdependencias ecológicas y humanas, la explotación del territorio y la conversión de la vida en una máquina de producir y acumular riqueza financiera. Una vez más, los procesos inmobiliarios-financieros, las rentas del alquiler y la terciarización de las economías urbanas aupadas con fuerza por el turismo, juegan un papel central.

Frente a este panorama, las preguntas que se pueden plantear son muchas: ¿qué puede el municipalismo ante semejante maquinaria inmobiliario-financiera? ¿Qué margen de maniobra queda desde los gobiernos del cambio? ¿Qué articulaciones políticas debemos construir para respaldar el cuidado del conjunto de la sociedad y no la explotación que la desarticula? En último término, ¿cómo se inserta este proceso municipalista de manera autónoma, aunque sea como anomalía, dentro del ciclo de transformación institucional que vivimos tras las elecciones generales de 2017?

La ciudad, el territorio y la crisis urbana

Ciudades. Las líneas maestras de la política de nuestras oligarquías están sobre la mesa. Se trata, otra vez, de intensificar las políticas económicas vinculadas al sector inmobiliario. Factores como el turismo o los grandes desarrollos urbanísticos sirven, de nuevo, como reguladores para el acceso a la vivienda, sobre todo en ciudades como Madrid o Barcelona. Los datos son exorbitantes. Sólo en el primer trimestre de 2017 se invirtieron en España más de 3.400 millones de euros en el sector, cifra que superó en un 50 % el récord previo post-crisis del primer trimestre de 2016. A la cabeza de estas inversiones, los Fondos de Inversión y las SOCIMIS buscan tres líneas de activos de alta rentabilidad, como son las viviendas turísticas, las oficinas de gama alta o las viviendas nuevas. Y por primera vez una apuesta decidida por el alquiler —como método más seguro de organización del negocio— gana protagonismo en España. El sueño de la sociedad de propietarios que compartieron Franco y el bipartidismo democrático se lanza ahora a la busca y captura de inquilinos.

Con el motor inmobiliario-financiero a toda máquina, las consecuencias no se han hecho esperar. Subidas espectaculares del precio de los alquileres, la creación de nuevos mercados de vivienda turística o el crecimiento de las hipotecas son sólo algunas de las secuelas. El mercado inmobiliario vuelve a ser —como en los viejos tiempos— inaccesible y exigente. Prueba de ello son el resurgimiento del mercado hipotecario, el aumento de los desahucios y, en definitiva, la reordenación de las ciudades en favor de los centros turísticos especializados en el sector servicios.

Como efecto secundario inmediato, se suma la expulsión de población hacia las segundas y terceras periferias urbanas o la apertura de nuevas líneas de negocio de la mano del pujante mercado de oficinas. Sólo en Madrid este mercado recibirá una inversión de más de 5.000 millones de euros en los próximos años. Las expectativas del negocio inmobiliario vuelven a dinamizar la inversión y la economía de nuestras ciudades. Pero como ya sucedió en 2008, un mercado inmobiliario al alza con un entorno laboral de paro y enorme precariedad hace que la más mínima turbulencia en los salarios o el aumento del paro empuje de nuevo al precipicio a cientos de miles de familias. El horizonte se vuelve explosivo si consideramos que tanto el Estado como la mayoría de las Comunidades Autónomas no han impulsado políticas públicas que garanticen los derechos más básicos —en materia de vivienda o de pobreza energética—, ni tampoco han reconstruido presupuestos públicos que afiancen el gasto social necesario en educación y sanidad.

También es interesante saber —a modo de proyección—, como puede afectar un escenario de crisis a las cuentas de las administraciones locales. Como bien sabemos, los Ayuntamientos viven fundamentalmente de dos tipos de ingresos. El primero es el Impuesto de Bienes Inmuebles, quizás uno de los impuestos más regresivos que existen y que supone más del 63 % de los ingresos que gestionan directamente las entidades locales, además de suponer en la mayoría de los casos entre el 20 % y el 30 % de sus ingresos totales. En este aspecto debemos decir que en muchas ciudades el ciclo municipalista está viviendo, de algún modo, de las rentas que supuso la subida desproporcionada del IBI, en toda España, durante los últimos años. Si en 2004 las entidades locales ingresaban 6.029 millones de euros por este concepto, en 2014 ya se había llegado a los 13.145 millones. La contradicción está en que uno de los impuestos más regresivos financie buena parte de las arcas municipales.

La segunda gran partida que sustenta las cuentas municipales, son las transferencias del Estado. Elaboradas a partir del reparto de un pequeño porcentaje de los ingresos por IRPF, el IVA y otros impuestos al consumo, este tipo de ingresos también se han multiplicado notablemente en los últimos años. El aumento de cotizantes a la Seguridad Social y especialmente el aumento de los impuestos indirectos aplicados sobre el consumo son la causa de este crecimiento. A pesar de que las cifras actuales aún no hacen sombra a las previas a la crisis —por ejemplo en 2008 las transferencias estatales se acercaron a los 13.000 millones de euros— se puede asegurar que una buena parte de los ingresos del actual ciclo también cabalgan sobre esta recuperación asentada sobre la precaria situación del consumo. Para tener una panorámica en cifras, en el año 2012 el total de estas transferencias a los municipios no llegó a los 6.000 millones, mientras que en el año 2015 superó los 7.200 millones de euros. Pero ¿qué significa este crecimiento? Sencillamente que Madrid aumente sus ingresos anuales en torno a los 300 millones de euros o que Barcelona lo haga en 200 millones.

En definitiva, los municipios están subordinados a una lógica difícil de solventar y que tiene que ver con su escasa autonomía fiscal y política. De un lado las cuentas municipales, a partir de 2015, se han visto notablemente saneadas por el aumento de ingresos producido entre 2015 y 2017. Al mismo tiempo ese crecimiento ha estado vinculado al aumento desproporcionado de impuestos poco progresivos como el IBI, y al crecimiento de una actividad económica (turismo, inmobiliario) que tiene que ver con el aumento del trabajo precario y con las transferencias del Estado que descansan en el crecimiento de los impuestos al consumo, que son absolutamente regresivos.

Semejante reparto de los ingresos hace que las cuentas municipales sean especialmente vulnerables. Al obtener sus créditos por medio de un sistema poco equitativo es necesario luchar por una mayor autonomía local que construya un modelo impositivo acorde, sobre todo en el caso de los municipios de más de 75.000 habitantes y aún más de las grandes ciudades, donde la economía inmobiliaria-financiera-turística es definitoria.

En este marco fiscal, caso de una nueva situación de crisis, la consecuencia directa de un equilibrio financiero tan precario, las entidades locales experimentarían rápidamente el fuerte impacto del descenso de empleo y consumo. Este estrangulará más pronto que tarde las cuentas públicas. El problema será tanto mayor, en la medida en que el modelo de recuperación ha vuelto a tomar la senda inmobiliaria.

El actual crecimiento se apoya, efectivamente, en una economía extractiva de inversión inmobiliaria y financiera, donde la turistización y la segregación social marcan un patrón de alza de los alquileres y del endeudamiento hipotecario. El resultado aparente es que se reservan los entornos urbanos más importantes a las rentas más altas, al ocio y al turismo. Este modelo económico se define además por sus escasos retornos sociales. Al mismo tiempo que no consolida ningún tejido productivo sólido, se basa en modelos laborales precarizados, que tampoco suponen un acicate fiscal que permita el más mínimo reequilibrio o reparto de la riqueza.

Lejos de eso y como hemos visto, los ingresos y recursos fiscales, especialmente escala local, se obtienen a partir de un sistema impositivo regresivo e injusto que penaliza a quienes menos tienen. La nula implantación de modelos fiscales acordes con la realidad de una economía financiarizada, como podrían ser los impuestos a las transacciones de capitales o al nuevo

empresariado ultraliberal ejemplificados en la turistización —véase el caso de AirBnB— cargan las políticas públicas sobre las clases medias y las clases populares. En conjunto, esto anula los posibles efectos redistributivos de las políticas de los llamados Ayuntamientos del Cambio.

Cualquier apuesta municipalista debe ser consciente, por tanto, que en estos años el peligro no es sólo su falta de autonomía política, que se traduce en el cumplimiento de la regla de gasto impuesta por Montoro. Ese enorme aparato de recortes en las cuentas públicas que es la Ley de Bases del Régimen Local se manifiesta en la llamada “tasa de reposición”, tecnicismo que no significa más que el cierre en banda del gobierno central, que impide contratar personal a las administraciones públicas. Además debemos ser conscientes de que el propio equilibrio financiero y el aumento de ingresos son en sí mismos una trampa, que a medio plazo podría llevar al precipicio también a los Ayuntamientos del Cambio, guiados por un modelo económico extremadamente contradictorio. De hecho, si no se logra imponer un sistema fiscal progresivo y gestionado desde las propias instancias locales y que esté adaptado a la realidad económica actual, cualquier turbulencia financiera barrerá de un plumazo las cuentas municipales, igual que lo hará con el empleo de cientos de miles de personas.

Por todo esto, resulta necesario insertar con fuerza en nuestros análisis la idea de que nuestra posición institucional en los ayuntamientos no es sostenible. Una parte importante de la maquinaria financiera está determinada por un ciclo económico abocado al fracaso. Resulta imprescindible dar con modelos urbanos radicalmente distintos, donde se reviertan las lógicas neoliberales del inversionismo y el empleo a cualquier precio. Es necesario hablar de autonomía política, económica y fiscal, pero también se trata de asumir que el actual marco político —a pesar de la cierta bonanza económica que beneficia al municipalismo— no es más que un espejismo, en especial si no enfrentamos la realidad social que la sustenta.

Siendo claros, el actual ciclo económico, que sanea a gran velocidad las cuentas públicas y su capacidad de intervención a nivel local, no debe encerrar al municipalismo en la alquimia electoral o atrincherarlo en las instituciones. Si bien las condiciones económicas actuales a nivel local permiten cierta reconstrucción institucional progresista, la realidad es que la desestructuración social avanza con paso cada vez más firme.

Entonces ¿qué municipalismo?

Con cierta exageración podemos decir que el ciclo municipalista tuvo la fortuna de llegar al poder local sin tener que enfrentarse a nada parecido al *dilema de Syriza*. Los gobiernos municipales del cambio articularon con cierta rapidez un discurso de progreso a través del gasto y la inversión pública. El resultado fue una cierta “autarquía municipalista”, que sin duda deberá ser analizada con más detalle y en su conjunto en el futuro. El discurso de progreso a nivel municipal no deja, en muchas ocasiones, de contrastar con las desigualdades y la brecha social creciente. En el caso de Madrid, por ejemplo, donde la retórica de impulso y progreso de la ciudad contrasta con los datos que la sitúan entre las tres capitales con mayores desigualdades de Europa.

Ya fuese por el propio contexto en el que las candidaturas llegaron a las instituciones o por la propia idea de representación política que finalmente se fraguó en el “imaginario del cambio”,

lo cierto es que tres años después, el municipalismo ha derivado por causas múltiples y con distinta intensidad, según las ciudades y pueblos, en estructuras especializadas en el ámbito institucional y en las aritméticas electorales. Son muchos los debates que echan en falta, debates que fueron impulsados por los movimientos municipalistas o simplemente por los movimientos social.

Esta añoranza del momento movimientista que —queramos o no— estaba vinculado al imaginario del 15M se echa de menos por dos cuestiones básicas. La primera es porque en la base del movimiento municipalista se encontraba un modelo organizativo que iba más allá de la representación institucional. Al menos en teoría, los movimientos municipalistas se pensaban como estructuras complejas que, lejos de ser un partido, se componían a través de sistemas de relaciones amplias a las que se debían y a partir de las cuales actuaban —sin que la candidatura asumiese la centralidad del ecosistema político municipalista—. La candidatura era así una función más dentro de los movimientos que las amparaban.

Una inquietud compartida por muchas candidaturas, sobre todo aquellas que gobiernan, está en la progresiva separación entre el ámbito institucional y los movimientos sociales que las auparon. El problema descansa en la ruptura más o menos pacífica, según los casos, con “las bases”; también en la falta o el debilitamiento de un entorno social activo que acompañe, arroje, critique, vigile y meta en cintura a estas candidaturas, lo que podríamos llamar contrapoder.

Por esbozar una idea general, el ciclo municipalista quería escapar de la estructura de partido. De hecho en la mayoría de los lugares se ha jugado con estructuras de candidatura más bien reducidas. Sin embargo, la celeridad de los tiempos, la falta de un diseño claro y la escalada de los acontecimientos, hicieron que las vinculaciones entre unos y otros no estuviesen lo suficientemente dibujadas. Este hecho también ha llevado a caminar en cierta soledad dentro del ámbito institucional, que en muchos casos gana autonomía y cierta desvinculación de sus movimientos de base. Pero ¿de qué movimientos estamos hablando? ¿Qué fuerzas los sustentan? ¿Qué les hace imprescindibles para el hecho municipalista?

En 2015 el imaginario 15M, con movimientos sociales que excedían al activismo clásico, un sistema de partidos tradicional tambaleándose y con la memoria reciente de la actividad en la calle (las asambleas, la PAH, el movimiento feminista, los 15M), articuló una imagen nítida de por donde podía encaminarse aquello que se denominaba municipalismo. Las candidaturas debían ser la expresión institucional de una realidad plural, donde diversos sectores se agrupaban y extendían la crisis de legitimidad del sistema que se respiraba en las calles a las instituciones locales. En torno a sus reivindicaciones se habían agrupado ciertas mayorías sociales que buscaban en el campo electoral nuevas opciones en las que confiar.

El esfuerzo municipalista se concentró en que las candidaturas pudiesen ganar legitimidad dando voz a todos los movimientos y expresiones políticas que querían apostar por un cambio democrático radical. Esa pluralidad se concretó, en muchos lugares, en un método democrático básico. Los programas participados y la apuesta en la mayoría de los casos por sistemas de primarias que garantizaran la máxima pluralidad y participación, fueron sus dos grandes señas de identidad. Otras de las características fue el trabajo de vinculación entre los movimientos y los entornos cercanos a cada una de las candidaturas, aunque lo cierto es que —como ya señalábamos antes—, con el paso del tiempo esas vinculaciones se han ido

haciendo cada vez más débiles y las candidaturas han ido tomando las riendas de un proceso que debía ser más colectivo y estar más apoyado por fuera de las instituciones.

Con todas las distancias que diferencian a unas candidaturas de otras, la realidad es que la inercia de las estructuras orgánicas, la profesionalización de los "liberados" y la propia posición de poder institucional han desdibujado en demasiadas ocasiones otros horizontes posibles, lo que preocupa en muchas candidaturas. Aquella idea que los sectores más independientes y no-partidistas del municipalismo defendieron hace tres años, la clásica figura del movimiento verde alemán del partido antipartido, del partido-movimiento, ha quedado desarticulada. De un lado, la locomotora institucional tira fuerte y se desengancha de los procesos más lentos de la democracia participativa. De otro, existe cierta aceptación de la delegación, incluso en los entornos más cercanos de las candidaturas. Por último, también se ha producido un fuerte desencanto de quienes observan en este proceso la moderación política que ha producido el hecho institucional en los programas políticos y en los representantes del cambio.

Para muchos sectores no alineados en partidos políticos dentro del ciclo municipalista, lo que se denominaba movimiento municipalista no podía ser reducido a la forma-partido. Sin embargo, la participación de diversos partidos políticos en las candidaturas hacía necesario un entendimiento que precisamente asumía lógicas de partido. Más allá del lema "el municipalismo no tiene partido", que animó las elecciones municipales de 2015, en la práctica se han articulado nuevas formas partidistas que aunque formalmente superaban la idea de partido tradicional, a su vez no dejaban en muchas ocasiones de repetir muchos de sus vicios.

Diversos elementos han intervenido en contra de aquellas lógicas que dotaron de singularidad, independencia y autonomía al movimiento municipalista. Además de los problemas de separación de la lógica institución-movimiento, el ecosistema de partidos que debían ayudar a profundizar en el ciclo político de radicalización democrática también ha influido, y no necesariamente de forma positiva.

En cada territorio, esta transformación se ha dado de una manera distinta. En casi todos los casos, sin embargo, los aparatos de partido han impuesto la lógica de reparto del poder y control del escenario. Así ha ocurrido en las candidaturas bajo la órbita de Podemos, que con el objetivo de sobrevivir a nivel estatal y regional/nacional, han marcado muchas candidaturas con formatos de pacto cada vez más definidos en despachos y con sistemas de primarias cada vez más descafeinadas. El método funciona y evidentemente permite a las estructuras más clásicas hacerse con los mandos de muchas candidaturas a través de esos mismos acuerdos a puerta cerrada o sistemas de votación mayoritarios que marginan a las minorías.

Con este tipo de prácticas, también ha acabado por agotarse el debate sobre el partido-movimiento, sobre las vinculaciones políticas y sociales capaces de romper el autismo propio de los partidos y candidaturas, de quebrar su aislamiento respecto de la complejidad de lo que sucede fuera de sus límites. De alguna manera, se ha desdibujado, a la vez, tanto la idea de partido y sus funciones, como la idea de movimiento. La denominada nueva política ha entrado así en una espiral de indefiniciones que caminaba entre la desorientación y la vuelta al pasado.

Vistalegre 2. ¿Os acordáis?

Podemos, determinante también en el ámbito municipalista, trató de abordar todas estas cuestiones en los debates que rodearon a Vistalegre 2. En este Congreso, muchas personas nos vimos reflejadas e intentamos debatir en torno a las grandes líneas abiertas en relación con las cuestiones antes señaladas.

Por un momento parecía que en aquellas jornadas se iba a hacer un replanteamiento serio de la estrategia que se había llevado desde el anterior Vistalegre. Todas las ponencias y debates se acompañaban de la idea de que Podemos debía adoptar un modelo organizativo y político más abierto y diverso, de reparto del poder y no de concentración del mismo en manos de muy pocas personas. También se dejaba entrever una crítica y una voluntad de superación de la denominada “máquina de guerra electoral”, que definía todo el quehacer político en torno a criterios de eficacia electoral y rapidez en la toma de posiciones (la famosa guerra relámpago). Por último, se abría la puerta a un Podemos más allá del partido donde se tematizase y se diese protagonismo a una idea imprecisa pero mucho más amplia que lo conocido hasta el momento y a la que daban el nombre de “movimiento popular”.

Textualmente en el documento del Equipo de Íñigo titulado *Desplegar las velas* se hablaba de conformar una “organización democrática y popular, distribuida, territorializada, feminizada, compleja y capacitada para gobernar nuestro país”. Según su criterio se trataba de promover una especie de “comunidad popular”, de “construir pueblo”.

En términos similares, aunque más apegado a un imaginario “de movimiento”, utilizando incluso conceptos como “contrapoder” se expresó el documento de Pablo Iglesias: *Plan 2020. Ganar al PP, gobernar España, construir derechos*. El documento que defendieron los seguidores de Iglesias defendía la construcción de un “movimiento popular y ciudadano que avance posiciones”. También para ellos se había pasado a una nueva fase en la que la “máquina electoral” —ya un poco desengrasada—, debía dar paso a un movimiento más complejo, rico y enraizado. De repente, muchos de los paradigmas movimientistas, de superación de las listas plancha, la apuesta por la diversidad, el respeto a las minorías, la profundización democrática que fueron expulsados a patadas de Vistalegre 1 cobraban ahora un papel protagónico. También el municipalismo ganó muchos enteros en ambas propuestas. De repente parecía que algo estaba cambiando.

Sin embargo, lo que podría haber sido un cambio de rumbo no hizo sino torcerse, casi desde el principio. Aquel giro repentino tenía en su puesta en escena cierto olor a fraude. Obviamente, la construcción de un movimiento popular no podía llegar por decreto. Para aquel entonces, además, la herramienta Podemos caminaba irremediabilmente hacia una estructura de partido clásica.

Ni la capilaridad errejonista, que deseaba llegar hasta el último club de fútbol de los barrios, ni el imaginario movimientista más clásico de Iglesias se podían resolver desde o a través de Podemos. El principio básico de autonomía y autoorganización de las iniciativas de movimiento era contradictorio con la centralidad reclamada para Podemos. Sus líderes simplemente se dirigían con cierta exterioridad a un campo desconocido. La máquina de guerra electoral —a pesar de los discursos— habría producido efectos irreversibles.

El tiempo confirmó el desgaste del partido. El Podemos movimiento-popular, aquel que quería salir de sus encasillamientos como partido, de movilizar la vida cotidiana, el Podemos reapropiado por los Círculos, no ha terminado de dar señales de vida. Antes bien, hemos asistido al abigarramiento de una estructura de partido donde Iglesias se ha hecho con las riendas y Errejón ha asumido su papel secundario a la espera de aprovechar su oportunidad de resucitar como cabeza del partido a la Comunidad de Madrid.

No obstante, de los debates de Vistalegre 2 quedó fuera del foco mediático el documento político que presentó la candidatura de Podemos en Movimiento. En aquel documento titulado *Por un Podemos en Movimiento* se podían ver algunos de las cuestiones medulares del dilema de los movimientos populares. En primer lugar, fue el único documento que abordó la subjetividad que genera el poder institucional, propia de aparatos que están en pugna constante por conservar sus posiciones internas. En segundo lugar, la idea de movimiento que allí se expresaba conservaba la necesaria exterioridad para poder relacionarse con el propio aparato de partido: lo que denominamos movimientos populares nunca podía entenderse en función del aparato de partido, por muy participado o abierto que éste fuera. La clave no estaba en cómo Podemos organizaba a su alrededor un movimiento propio o cercano, sino en cómo desarrollar políticas que fomentasen relaciones de contrapoder, movimientos autónomos no subordinados a las lógicas de partido.

Como no puede ser de otro modo —según esta ponencia—, no se trataba de pensar la institución junto con los movimientos, sino de desplazar el centro político fuera del hecho institucional, fuera del ámbito de lo instituido. Los movimientos y los contrapoderes no pueden ser entendidos como una función más de las apuestas institucionales. Antes al contrario, las herramientas de participación electoral deberían ser una función —entre otras muchas— de los movimientos.

Esta idea de movimiento es la que inspiró a una buena parte de los movimientos municipalistas hace ya tres años. Sin embargo, como bien sabemos, el entorno político no se ha configurado sobre un territorio de movimientos, de luchas y de plazas llenas de asambleas. Antes bien, son los aparatos de partido y sus sistemas de relación los que han ido ganando terreno. Por el camino, una buena cantidad de iniciativas independientes y de movimientos organizados por redes diversas, que dieron aliento a buena parte de las candidaturas de 2015, han quedado desorientados y atrapados en lógicas cada vez más partidistas.

Crucial en este sentido, ha sido el giro que Podemos hacia el PSOE. Desde hace un año Podemos ha tratado de consolidar un bloque electoral suficientemente fuerte como para prescindir de las alianzas y apuestas más disgregadas y complejas, con las que se afrontaron las elecciones municipales de mayo de 2015. Experimento en este sentido ha sido la entrada de Podemos en el gobierno de Castilla-La Mancha y los preacuerdos para incorporar al PSOE a algunos de los gobiernos del cambio (Madrid en primer lugar). Obviamente este giro ha quedado parcial y temporalmente suspendido en las últimas semanas debido a la represión en Cataluña y a la posibilidad de una declaración de Estado de excepción con la colaboración del PSOE. No obstante, su inclinación a este tipo de pactos institucionales volverá si la situación catalana entra de nuevo en cauces menos agresivos.

En esta misma línea, debemos considerar también como las estrategias de organizaciones políticas a escala nacional y regional/nacional condicionan el panorama local. Se puede decir

que los actores independientes, autónomos o no partidistas que participamos en las candidaturas municipalistas nos enfrentamos a un panorama menos abierto que en 2015. Podríamos decir que en estos dos años, lejos de escalar la lógica de las candidaturas municipalistas hacia el plano estatal, han sido más bien los planos estatales y regionales/nacionales los que han ido determinando el campo de juego de las apuestas municipalistas.

Los retos del municipalismo. Los caminos del sindicalismo social

A pesar de todas estas dificultades inscritas en la propia inercia institucional y en la relación con los partidos (Podemos en primer lugar), el reto principal del municipalismo sigue siendo la construcción de una fuerza social reconocible y arraigada. Una fuerza capaz de superar la dimensión ya representada por las estructuras organizadas en torno a unos u otros partidos políticos.

Como ya pasó en las elecciones del 2015, este reto pasa por entablar acuerdos con todas aquellas organizaciones que estén dispuestas a dejar a un lado su propia identidad y por construir candidaturas capaces de concitar una fuerza social mayor que la que representaría una simple suma de siglas. Ambos límites sólo podrán ser superados si sabemos construir movimientos que tengan la potencia y los mecanismos suficientes como para subordinar las posiciones institucionales. Sea como sea, no se trata de un problema teórico sino práctico ¿cómo lograr generar una nueva dinámica política y de movimiento que desborde lo institucional?

Como se ha señalado, vivimos unos momentos en los que se ha producido un cierto espejismo de progreso, que acompaña la mejora de las cuentas públicas. En estos meses, el Banco Central Europeo ha anunciado una retirada de los estímulos monetarios, que podría llevar la economía española a un tramo difícil. De acuerdo con este marco, una posible recaída de la economía volvería a tener su epicentro en el sector inmobiliario-financiero, y de nuevo la onda expansiva se lanzaría sobre el empleo precario y los trabajadores/as pobres, que son mayoría en nuestro mercado laboral.

En este sentido, los elementos que apuntan a una situación de pauperización de masas vienen siendo descritos por múltiples informes. Pero el elemento fundamental es el relativo relanzamiento de las luchas de los propios sectores precarizados (trabajadores aeroportuarios, kellys, servicios de limpieza, trabajadores de los servicios públicos externalizados). Junto al aumento de los trabajadores y trabajadoras pobres, de las altas tasas de precariedad y los datos de pobreza en España, las nuevas protestas sindicales nos marcan la pauta de las resistencias al proyecto neoliberal español.

En los últimos meses hemos observado importantes conflictos en el sector de la Estiba, quizás uno de los últimos que mantienen ciertas garantías laborales en España. Pero también hemos asistido a las huelgas de Eulen en el aeropuerto del Prat, la lucha de las Kellys en el sector hotelero o las huelgas en el servicio de comida a domicilio Deliveroo. Igualmente hemos presenciado pequeñas y grandes movilizaciones de manteros en varias ciudades, que conforman pequeños sindicatos, y al resurgir en Europa de las luchas migrantes y de las personas que buscan refugio, además de los no pocos motines y fugas de los CIE (Centros de

Internamiento para Extranjeros/as). Todas estas son luchas que se producen en el seno de segmentos sociales muy precarizados y que tocan nodos centrales de la economía, en especial los servicios vinculados al turismo. Un sector que en 2015 facturó 110.000 millones de euros, más de un 11 % del PIB español.

Enfrentado a esta situación, el movimiento municipalista debe escapar del cerco institucional; debe pensar mecanismos de organización en un contexto fuertemente precarizado. El municipalismo tiene que ir mucho más allá de representar los conflictos; debe promover que partidos y candidaturas afronten un reto organizativo que no es de partido sino que “sindical”. Muchos de estos conflictos pueden poner (de hecho, ya ponen) en su punto de mira algunas políticas de los municipios del cambio.

En la asunción de este reto, es de capital importancia que las candidaturas expresen la ruptura que ya se ha producido a nivel social. El empobrecimiento generalizado y la crisis en ciernes nos empujan a colaborar en espacios de lucha en los que las políticas públicas y las posiciones institucionales estas obligadas a someterse a una fuerte tensión política. Este reto pasa por romper el autismo propio de las dinámicas institucionales que solo ven en las luchas un espacio más al que representar. En la actualidad no se trata, por tanto, de utilizar las fuerzas sociales y precarias en movimiento como fuente de legitimación o tomar posición como representantes de las mismas. Se trata de asumir que la construcción institucional y el aparato que forman las mayorías electorales están muy lejos de poder asumir el verdadero significado de la autonomía de las luchas.

Sin duda, entre las posiciones institucionales y los nuevos movimientos sindicales puede haber sinergias e incluso cooperación. Pero es preciso reconocer que mientras uno juega en el teatro de sombras de la representación política, el segundo crece sobre las lógicas reales de la precarización. La necesaria organización que tienen que adquirir las nuevas formas sindicales no puede ser representada, ni debe ceñirse a los canales de participación propios del ámbito institucional. Si estos movimientos crecen, la dimensión autónoma de estas luchas asumirá la función política de su autorepresentación, escapando a las capturas que imponen los canales instituidos. Esto implica hacerse cargo de su papel como contrapoder. Dicho de otro, el nuevo sindicalismo social adquirirá su autonomía, autotutelando su propio modelo de representación, cortando cualquier intento de cooptación por parte de los aparatos políticos-institucionales.

Por eso, el partido y las candidaturas no deben pensarse como el epicentro de nada, tal y como ha sucedido, queramoslo o no, en los últimos tres años. Las candidaturas deben ser ante todo estructuras subordinadas a la realidad colectiva que las impulsó. Ese control es incómodo, pero en el fondo es la única palanca política democrática efectiva. Curiosamente para zafarse del control de los movimientos, se ha acabado por imponer una particular retórica institucional. Una retórica que deberíamos resumir en la fórmula, tan manida estos meses, del “Gobernar para todos”; tres simples palabras que deberían provocar una profunda reflexión. En primer lugar porque este tipo de ideologemas parte de la asunción de que las luchas sociales (como las de la PAH) son sólo la expresión sólo de una "parte de la sociedad", intereses particulares: como si una lucha (como la de Las Kellys) no fuese la verdadera representación de la externalizaciones de servicios precarios, como si los estibadores en lucha fuesen una expresión corporativa y no una forma entre muchas de la lucha contra la privatización.

El particularismo o el corporativismo se ha convertido una de las atribuciones más escuchadas en los últimos dos años. El recurso del “gobernar para todos” apenas esconde una sencilla intención, la de “no atarse a nadie”. Ese “para todos” se presenta como un universal, que permite que las posiciones institucionales asuman una labor de mediación-representación total. Quienes quedan fuera de la misma son siempre un conjunto de actores individuales y particulares, aquellos que no representan el todo, nunca lo suficientemente representativos de la "mayoría". Según parece lo universal sólo puede componerse por quien interpreta y representa ese “para todos”, que no privilegia a nadie y que es, por supuesto, la propia posición institucional.

La anomalía del municipalismo en el ámbito de la representación política es que, al definirse como movimiento, decidió explícitamente que gobernar debía significar comprometerse con un hecho colectivo y externo, eso que denominamos "movimiento municipalista". Por eso, aquellos procesos colectivos que impulsaron la construcción de nuestras candidaturas, deben entender que el único camino para gobernar de otra manera es hacerlo obligado a las dimensiones colectivas y a los programas políticos construidos en cada territorio. Sin este tipo de compromiso, la suerte de nuestra participación institucional estará echada. Y lo estará para mal.